



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTES	Gladis Cano Cano y Luis Fernando Guerra Ospina
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-020-2020-00415
TEMA	Pensión de Sobrevivientes
DECISIÓN	Revoca sentencia

El treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **002** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia dentro del proceso ordinario promovido por **GLADIS CANO CANO** y **LUIS FERNANDO GUERRA OSPINA** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.**, con radicado **05-001-31-05-020-2020-00415**.

• **PRETENSIONES:**

Los demandantes pretenden se condene a la accionada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo **JUAN FERNANDO GUERRA CANO** a partir del 13 de julio de 2017, junto con los intereses moratorios o la indexación y costas procesales.

• **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamentan manifestando que convivían con su hijo fallecido **JUAN FERNANDO GUERRA CANO**. Que su hijo era el que suplía sus necesidades básicas y la de ellos como padres. Que, al momento de fallecer su hijo, el 13 de julio de 2017, no tenía compañera permanente ni hijos. Que su hijo le entregaba cada quincena el valor de \$300.000, es decir \$600.000 mensuales, los cuales eran utilizados para los gastos de servicios públicos, internet, parabólica, gas natural, agua, luz e incluso para el vestir y

el colegio de algunos hermanos que para aquel entonces estudiaban, como también para la asistencia de citas médicas y medicamentos. Que PROTECCIÓN S.A. les negó la pensión de sobrevivientes, por su hijo no haber cotizado las 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento. Y que posteriormente al ser solicitada nuevamente, se les manifestó que no cumplían con el requisito de la dependencia.

- **CONTESTACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Procedió la parte demandada a darle respuesta a los hechos señalando que, no le consta la convivencia del fallecido con sus padres de forma directa, pero de la investigación administrativa si se pudo desprender lo afirmado. Que no le consta que no contara con compañera permanente ni hijos, pero de la investigación así se desprende. Que no le consta los ingresos dados por el hijo a sus padres, pero no es real el aporte que manifiestan los demandantes, lo cual deberá probarse. Y que es cierto que se les negó la pensión de sobrevivientes, primero por una falencia en las semanas que posteriormente fue analizada, verificándose que los demandantes no cumplen con la dependencia económica, ya que quien vela por la manutención de la señora GLADIS CANO es su esposo; y el aporte otorgado por el hijo era el de un buen hijo al hogar en el que vivía. Se opuso a todas las pretensiones, y propuso varias excepciones de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 09 de febrero de 2022, el Juzgado Vigésimo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** que la señora GLADIS CANO CANO, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión de la muerte de su hijo JUAN FERNANDO GUERRA CANO, en cuantía de 100% de la prestación pensional solicitada.

Como argumento de su decisión, después del despacho llegar a unas conclusiones, señaló que con la prueba testimonial no existe duda que el causante era el que suministraba un mayor aporte económico para el hogar, pudiéndose decir que los dos demandantes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, pero que debido a la confesión realizada por el señor LUIS FERNANDO GUERRA en la investigación administrativa, al manifestar éste

que no necesitaba la pensión, ya que no dependía del causante, solo se reconoció en favor de la señora GLADIS CANO.

Como consecuencia, **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar a la señora GLADIS CANO CANO, el retroactivo pensional generado por concepto de la pensión de sobrevivientes entre el 13 de julio de 2017 y el 30 de enero de 2022, por valor de **\$50'012.863**.

Y que a partir del 1° de febrero de 2022, la entidad demandada deberá continuar reconociendo una mesada pensional por valor de un salario mínimo, bajo el importe de 13 mesadas pensionales al año, sin perjuicio de los incrementos anuales generados por el Gobierno Nacional.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios, sobre le retroactivo pensional generado, que deberán liquidarse desde el 28 de junio de 2020, hasta el momento efectivo del pago.

AUTORIZÓ a la demanda a realizar los descuentos en salud.

ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN S.A. de las demás pretensiones elevadas.

Y, **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

La anterior decisión fue recurrida por el apoderado de PROTECCIÓN S.A., quien expuso que la tesis asumida por el despacho se basó en un error en la valoración probatoria, error que riñe con las confesiones realizadas por la parte demandante, por las siguientes razones:

Que no es cierto que el aporte del causante sea el principal del hogar, toda vez que solo basta mirar la prueba documental que fue reconocida por los demandantes como las confesiones dadas en audiencia pública, pues al preguntársele a los actores que el aporte dado por el causante era por valor de \$331.000, ambos contestaron afirmativamente, por lo que debe tenerse como el máximo que debe estimarse en caso de una eventual condena. Y que

los gastos del hogar eran muy superiores a los \$331.000, lo cual se ratificó en la investigación administrativa y en el interrogatorio de parte.

Que a la conclusión que llega el despacho, de que el señor LUÍS FERNANDO GUERRA OSPINA tenía trabajos intermitentes, la misma no se puede dar, toda vez que el mismo demandante dice que ha trabajado, no con la intermitencia que expresan los testigos, y además documentalmente se encuentra acreditado en el proceso que el actor ha trabajado de manera ininterrumpida como lo dicen las constancias de seguridad social.

Que los testimonios son de oídas, tan así que una de las testigos, indicó que solo en una ocasión tuvo conocimiento directo de la entrega del dinero, y la otra porque se lo contaban los demandantes.

Que la investigación administrativa, no conlleva un análisis jurídico, e implica que lo que allí se consigna son manifestaciones de los propios demandantes, quienes entregan información a un funcionario administrativo contratado por PROTECCIÓN S.A., y al realizar ya el análisis jurídico, la entidad no tiene por qué atenerse a lo que se consigne, porque en ese análisis jurídico es de donde se concluye situaciones que llevan a negar la prestación, luego cuando se toma esa investigación administrativa para efectos de mora, hay que tener hincapié en esa consideración, ya que no puede dársele validez documental a una confesión de parte.

Que el despacho tomó lo que les convenía a los demandantes y desconoció las confesiones vertidas en la investigación administrativa, que fue reconocido en audiencia. Y si se le da validez a lo dicho por los demandantes en dicha investigación, también se le debe dar validez que el señor LUIS FERNANDO GUERRA laboraba de forma ininterrumpida y que tenía afiliación a seguridad social vigente y continua; como también se le debe dar validez a que la demandante tenía una tarjeta de crédito con un cupo, la cual no se le entrega a ninguna persona sin ingresos.

Y que si se toma el aporte que los demandantes indican de \$331.000, no es un aporte determinante, ya que es un aporte del causante para sus propios gastos y su propio sostenimiento, tanto es así que, al fallecer el afiliado el hogar no ve menguado sus ingresos, e incluso los gastos reportados hoy son superiores a los que tenían cuando falleció el afiliado, como lo establece la investigación administrativa.

- **ALEGATOS:**

- ✓ DEMANDANTE:

La parte actora, expuso en sus alegatos que se debe **confirmar** la sentencia de primera instancia, toda vez que la señora GLADIS CANO cumple con los requisitos para solicitar la pensión de sobreviviente, ya que el causante dejó acreditadas las 50 semanas cotizadas al sistema pensional, pues cotizó 52.43 semanas en los 3 años anteriores a la muerte. Que depende económicamente de su hijo fallecido, pues este entregaba mensualmente un valor de \$600.000, y con este dinero suplían gastos de la vivienda, ropa y médicos. Que los testigos fueron unánimes en sus declaraciones, al manifestar que era el hijo fallecido, quien solventaba los gastos del hogar al tener un empleo más estable que su padre y respecto de su madre que no laboraba, y que la situación de escolaridad de sus hermanos, no permitía que éstos aportaran al hogar. Que, con el fallecimiento del causante, se presentó en el hogar una situación de falta de ingresos y solvencia para garantizar los gastos mínimos del hogar. Que se debe tener en cuenta que el ingreso del señor LUIS FERNANDO GUERRA no es estable, lo cual no significa que es independiente económicamente de su hijo. Que se debe tener en cuenta las sentencias C-111 de 2006, T-140 y T-326 de 2013, SL 816 de 2013, SL14923 de 2014, T-456 de 2016, y SL3514-2018. Que en caso de no considerarse beneficiario al señor LUIS FERNANDO GUERRA, se debe confirmar el reconocimiento pensional a la señora GLADIS CANO. Y que se confirme el reconocimiento de los intereses moratorios.

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

El apoderado de la demandada, en sus alegatos señaló que, se debe **revocar** la sentencia de primera instancia, toda vez que el demandante LUIS FERNANDO GUERRA, en la investigación administrativa, ratificado con el interrogatorio de parte, indicó que no dependía económicamente del causante, por lo que se omitió no condenar en costas. Que los demandantes confesaron lo manifestado en la investigación administrativa, indicando que el aporte de LUIS FERNANDO GUERRA era muy superior al que asumía supuestamente el causante. Que el sustento de que era el causante quien se encargaba del sustento del hogar, no tiene sustento más allá de los propios dichos de la parte actora. Que en la demanda se indicó que el causante apoyaba el hogar, pero

nunca se indicó que apoyara de forma total, contrario a lo mencionado en interrogatorios de parte, por lo que de tal información no hay constancia. Que la afirmación de que el señor LUIS FERNANDO GUERRA trabajaba por día se cae por su propio peso, al comprobarse con la prueba documental al encontrarse afiliado a la EPS COOMEVA en el régimen contributivo desde noviembre de 2013 hasta abril de 2020. Que no fue objeto de tacha que la demandante GLADIS CANO tiene tarjeta de crédito, lográndose concluir que a ninguna persona se le otorga tarjeta de crédito sin que demuestre generación de ingresos. Que el apoyo del hijo fallecido no era determinante ni necesario para el sostenimiento del hogar, ya que este fue reemplazado de forma tal, por el ingreso de otro hijo, que la familia nunca se vio afectada económicamente. Que se debe tener en cuenta que el causante no se encontraba laborando al momento de la muerte, por lo que para el momento en que fallece, no tenía capacidad económica para solventar ni apoyar los gastos del hogar. Que los testigos traídos al proceso, resultan impertinentes, inconducentes e inútiles, toda vez que la señora MARÍA ALEJANDRA, ya que toda la información la conoce de oídas. Y que la segunda testigo es mentirosa, ya que afirma tener conocimiento total de los momentos en que el causante entregaba el aporte, pero sospechosamente no recuerda a quién le entregaba ese dinero, y posteriormente contesta a todas las preguntas que no lo sabe. Por lo anterior, señala que no hay ninguna prueba que permita dar cuenta de la dependencia económica.

CONSIDERACIONES:

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Registro civil de nacimiento de JUAN FERNANDO GUERRA CANO, en donde se corrobora que los padres son los demandantes.¹
- Registro civil de defunción, en donde se certifica que el señor JUAN FERNANDO GUERRA CANO, falleció el **13 de julio de 2017**.²

¹ Folios 19 y 20 de la demanda digitalizada

² Folio 21

- Documentos expedidos por la entidad accionada el 5 de mayo y 23 de octubre de 2020, donde se le niega la pensión de sobrevivientes a los demandantes.³
- Historia laboral del señor JUAN FERNANDO GUERRA CANO.⁴
- Informe de investigación, realizado por VALUATIVE S.A.S., el 30 de abril de 2020, en la que manifestó el señor LUIS FERNANDO GUERRA OSPINA que no está interesado en reclamar el beneficio pensional, y le cede todo derecho a su esposa GLADIS CANO.⁵

Conforme a lo anterior, los **problemas jurídicos** se centrarán en establecer: *i)* si los demandantes acreditan la calidad de beneficiarios por depender económicamente de su hijo fallecido JUAN FERNANDO GUERRA CANO; y de salir avante dicha pretensión, se analizará *ii)* si es procedente la condena por intereses moratorios.

i. Dependencia económica de la demandante frente al hijo.

Atendiendo a la fecha de fallecimiento del afiliado fallecido, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual exige que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste; así mismo, indica el artículo 73 de la ley 100 de 1993, que remite al artículo 46 ibídem, el cual fue modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, en donde se consagra que el afiliado fallecido debió haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte.

En el caso objeto de estudio no se discute que el afiliado fallecido dejó causada la pensión por tener el número requerido de semanas, ya que realizadas las cuentas respectivas cuenta en los 3 años anteriores a su muerte con 52,43 semanas de cotización, lo cual se corrobora con la historia laboral aportada al expediente digitalizado.

³ Folios 23 y 30 a 38

⁴ Folios 40 a 41 y 44 a 46 de la demanda y 33 a 35 de la contestación

⁵ Folios 15 a 30 y 36 a 92 de la contestación de la demanda digitalizada.

En lo que tiene que ver con la **dependencia económica**, para resolver esta inconformidad, resulta necesario recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, en la que indica que para que sea procedente el reconocimiento de la prestación reclamada, frente a la dependencia económica debe suponerse “... *un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta... Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que, en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.*”

A efectos de determinar en cada caso particular, si una persona es o no dependiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas a partir de la valoración del denominado “*mínimo vital cualitativo*” o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Entre estos criterios se pueden señalar, entre muchos otros que “*Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna, el salario mínimo no es determinante de la independencia económica, la independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes*”.

Igualmente es importante traer a colación el pronunciamiento que frente a la dependencia económica de los padres frente a los hijos hizo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 46555 del 22 de mayo de 2013, en la que indicó:

“... tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba un verdadero apoyo económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.”

Asimismo, cuando los padres pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, frente a la demostración de la dependencia económica del causante al momento del fallecimiento, la Corte

Suprema de Justicia ha definido unos criterios en la sentencia SL-5605-2019, que pasan a señalarse:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta:

«Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

Regular y periódica

De manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.
(Negrilla fuera del texto)

Descendiendo al **caso de autos**, y analizada la prueba documental en conjunto con las declaraciones recibidas por los testigos, esta Sala concluye lo siguiente:

En cuando a los interrogatorios de parte, lo primero que cabe señalar, es que existe un principio universal, el cual consagra que la prueba no puede ser creada por quien la invoca, lo que quiere decir que los demandantes no pueden crear su propia prueba para luego valerse, sacar provecho o beneficio de la misma, pues es indiscutible no solo la presunción sino la convicción de la existencia de situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad.

Teniendo claro el párrafo precedente, la demandante GLADIS CANO madre del causante, manifestó que siempre ha sido ama de casa, y que era su hijo JUAN FERNANDO GUERRA quien aportaba el 100% del sueldo cuando su esposo se quedaba sin trabajo, posteriormente señaló que, conforme a la investigación administrativa, su hijo aportaba el valor de \$331.000, y que cuando el papá se quedaba sin trabajo, aportaba todo el sueldo. Expuso que no posee tarjeta de crédito. Y manifestó que su hijo fallecido no estaba

laborando para el momento de la muerte, pero que su esposo ya había empezado a trabajar nuevamente.

Por otro lado, el demandante LUIS FERNANDO GUERRA, quien es padre del causante, señaló que siempre ha sido conductor de vehículo y que labora con un particular. Indicó que las personas que aportaban en el hogar eran él y su hijo JUAN FERNANDO GUERRA, quien ayudaba con un valor de \$331.000. Manifestó que es cierto que en la investigación administrativa informó a la demandada, que no tenía intereses en la prestación económica, ya que era su esposa la llamada a reclamar la pensión. Expresó que su hijo al momento del fallecimiento llevaba poco de un mes sin laborar. Y señaló que su esposa GLADIS CANO no tiene tarjeta de crédito.

En lo que se refiere a la declaración de los testigos, se recibió el testimonio de la señora MARÍA ALEJANDRA GUERRA MUÑOZ, quien es sobrina del demandante LUIS FERNANDO GUERRA, y en lo que tiene que ver con la dependencia de los demandantes, expuso que su tío no ha sido muy estable en los trabajos, y que sabía que JUAN FERNANDO GUERRA, entregaba todo el dinero para los gastos del hogar, pero debido a que la señora GLADIS CANO, se lo contaba, desconociendo el valor que entregaba como el salario devengado por el causante. Expresó que su primo trabajaba en construcción y también trabajó en la ladrillera de San Cristóbal. Y señaló que cuando falleció el señor JUAN FERNANDO GUERRA, el hogar se vio demasiado afectado, debido a que faltó la parte económicamente del causante, y, por lo tanto, la familia les trataba de ayudar con comida al igual que los vecinos.

De igual forma, se recibió a la testigo ERIKA JOHANA GUERRA CORREA, quien es sobrina del demandante, la cual señaló que el causante JUAN FERNANDO GUERRA era el que colaboraba con casi todo para el hogar, debido a que su tío se lo comentaba. Igualmente manifestó que el causante asumía los gastos de la alimentación, los servicios y para los gastos de los hermanitos que eran menores de edad y estudiaban. Indicó que como ella vive cerca, escuchaba y veía cuando el causante les entregaba el dinero para colaborarles con los gastos del hogar, sin recordar a quien le entregaba el dinero, cada cuanto lo realizaba, como tampoco la cantidad, afirmando que estuvo presente solo una vez. Y expresó que cuando JUAN FERNANDO GUERRA falleció, recibieron la colaboración de los vecinos y las familias.

De las anteriores declaraciones, para la Sala, contrario a lo señalado por la juez, no se logró probar la efectiva dependencia económica de los demandantes, ya que no se acreditó con certeza y convicción que la ayuda fuera regular o periódica, cierta y significativa, como lo exige la Corte Suprema de Justicia, para la congrua subsistencia de los demandantes; teniendo en cuenta que todo buen hijo de familia tiene una obligación de socorro hacia sus padres.

Si bien, las dos testigos manifestaron que el causante fallecido entregaba todo su salario para el sostenimiento del hogar, dichas afirmaciones resultan contradictorias con lo señalado por los demandantes, ya que estos indicaron que su hijo solo aportaba una ayuda para el hogar, sin precisar que era todo el salario como lo aseguran las declarantes; además de lo anterior, no se puede decir que la actividad económica del padre era esporádica e inestable, ya que el mismo demandante en su interrogatorio expuso que siempre ha sido conductor, desde años atrás antes del fallecimiento de su hijo.

De igual forma, las declaraciones de MARÍA ALEJANDRA y ERIKA JOHANA GUERRA, no pasaron de ser unos simples dichos sin fundamento alguno, pues no tienen conocimiento directo de la entrega de la ayuda, ni del valor, ni mucho menos del destino específico que se le daba a la misma, esto es las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues respondieron de manera generalizada, sin tener ser fundamentos en sus afirmaciones, como lo comprueban las respuestas a las preguntas realizadas por el apoderado de la demandada, pudiéndose catalogar como testigos de oídas.

Por otra parte, al igual que lo expresa el apoderado de la parte demandada, nunca se pudo determinar que realmente el causante otorgara un valor de \$331.000, para el hogar, pues tan solo fueron los demandantes quienes pusieron dicha cifra en el formulario de la investigación administrativa, el cual no pudo ser corroborado por las testigos.

Siguiendo con el análisis de la investigación administrativa, no desconoce la Sala la dura condición de vida de los demandantes, ni la situación que presenta uno de sus hijos, no obstante, con los testigos recibidos en dicha investigación, como son LILIANA MARÍA GUERRA OSPINA, tía del causante, YESICA GARCÍA GUERRA, prima del fallecido, y ALEXIS ALEJANDRO TABORDA RESTREPO, amigo del causante, se corrobora aún más el total desconocimiento del aporte dado por el afiliado fallecido.

Así pues, es necesario señalar que, para la Sala no se encontró plenamente probado que la situación económica del hogar haya sido realmente afectada por la falta del ingreso del hijo fallecido, pues si bien la prueba testimonial afirmó que la familia recibió colaboración de los vecinos y la demás familia, no pasaron de simples dichos, sin comprobarse contundentemente que el soporte económico que realizaba su hijo era tan transcendental para desencadenar en la imposibilidad de procurarse una vida digna.

No hay duda alguna que, no existe prueba alguna para señalar que la demandante GLADIS CANO, posee una tarjeta de crédito no pudiéndose derivar de ello que recibe unos ingresos económicos; así mismo, no se puede decir que por el solo hecho de que el demandante LUIS FERNANDO GUERRA realizará cotizaciones a pensiones era independiente económicamente; sin embargo, con el análisis de la prueba en su conjunto, no se logró acreditar la real entrega de recursos del causante hacia los presuntos beneficiarios, como tampoco que fuera periódica, ni mucho menos que constituyera un verdadero soporte o sustento económico para los demandantes.

Así las cosas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le brinden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

Por todo lo anterior, debe decirse que no se logró probar la dependencia económicamente deprecada, por lo que los demandantes no pueden catalogarse como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo, como erradamente lo indicó la juez, debiéndose **REVOCAR** íntegramente la sentencia de primera instancia, y en su lugar **ABSOLVER** a PROTECCIÓN S.A. de todas las condenas en su contra.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia quedan a cargo de la parte demandante. En esta no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia revisada por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas, y en su lugar se **ABSUELVE** a **PROTECCIÓN S.A.** de las pretensiones incoadas en su contra por los demandantes.

SEGUNDO: Costas procesales como se dejó dicho en la parte motiva de esta sentencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Gladis Cano Cano y Luis Fernando Guerra Ospina
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-020-2020-00415
DECISIÓN	Revoca sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 1° de febrero de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 1° de febrero de 2023 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO